

T R A N S I C I O N : ASIMILAR LA PROFUNDA EXPERIENCIA

MANUEL A. GARRETÓN

El 11 de marzo de 1990, con la inauguración del gobierno de Patricio Aylwin, terminó la transición chilena desde un régimen militar a uno democrático, que se había iniciado el 5 de octubre de 1988 con la derrota del general Pinochet en el plebiscito convocado para perpetuar su régimen autoritario y mantenerse en el poder por ocho años más. Pero se trataba de un transición incompleta, que planteaba al primer gobierno democrático la doble tarea o el doble desafío de completar esa transición profundizando la democracia política y, superando las herencias autoritarias, iniciar la consolidación de ese régimen democrático.

Completar la transición implicaba superar o eliminar los llamados enclaves autoritarios o herencias dejadas por el régimen militar y que impedían que el nuevo régimen fuera totalmente democrático. Esos enclaves eran, por un lado, los elementos institucionales de tipo autoritario que estaban presentes en el nuevo régimen (elementos de la Constitución, leyes orgánicas, leyes comunes como la legislación laboral). Por otro, los actores no democráticos, como el núcleo pinochetista o la derecha autoritaria ligada al régimen anterior. Finalmente, el problema heredado de los derechos humanos.

La superación, eliminación o neutralización de estos enclaves aparecía como la primera prioridad, por cuanto su resolución era la viga maestra que permitiría a la mayoría social, política y electoral que constituía la Concertación de Partidos por la Democracia, gobernar efectivamente y enfrentar los problemas propios de la consolidación. Un retardo o empantanamiento en esta primera tarea implicaba mantener vigente un régimen democrático incompleto y correr el riesgo de posibles regresiones autoritarias, del mismo modo que retardar las tareas de consolidación, que son el campo propio de expresión de los actores y movimientos sociales, con lo que esto implicaba de desilusión o frustración de tales sectores.

Iniciar la consolidación democrática, simultáneamente con completar las tareas pendientes de la transición, implicaba para el caso chileno, dos dimensiones. Por un lado, avanzar en la democratización social (superación de desigualdades, integración de sectores marginados, participación de sociedad en la solución de problemas y en las decisiones a diferentes niveles, satisfacción de demandas juveniles) y, por otro, profundizar y extender la modernización, superando los efectos exclu-

yentes y perversos de las modernizaciones bajo el régimen militar.

VENTAJAS COMPARATIVAS

Para enfrentar este doble desafío, la situación chilena, comparada con otras experiencias similares, presentaba dos grandes ventajas.

En primer lugar, no se estaba frente a una crisis económica aguda que obligara al primer gobierno democrático a gastar su energía en resolver problemas como el de la inflación o balanza de pagos con planes de emergencia, como ocurrió en Argentina, Brasil, Perú, entre otros. Ello permitía concentrar toda la capacidad del gobierno en las reformas propiamente políticas o institucionales (reforma constitucional, descentralización del Estado y participación en la base, reforma del Poder Judicial, etcétera), aprovechando su enorme legitimidad y el aislamiento de los sectores autoritarios.

En segundo lugar, se trataba, por primera vez en estos procesos de democratización y en la historia de las últimas décadas en Chile, de un primer gobierno democrático formado por una coalición mayoritaria social, política y electoralmente, aunque no

institucionalmente (senadores designados, tribunal constitucional, por ejemplo). Ello permitía evitar la clásica separación entre los que administran las transiciones y los que administran las demandas sociales y el descontento, pasándose mutuamente la cuenta, dividiendo lo que fue el bloque opositor al régimen militar, y transformando al gobierno democrático en uno minoritario con el riesgo de desestabilizaciones y regresiones. Se trataba de una alianza entre clases medias y sectores populares, entre el centro, principalmente la democracia cristiana (DC), y la izquierda, principalmente socialistas y Partido por la Democracia (PPD). Este era sin duda el logro más importante de la transición chilena y en ello residía la fuerza del primer gobierno democrático.

CUADRO DE DESAFÍOS

Frente a esta doble situación positiva, se erigían los obstáculos institucionales o enclaves que impedían que la mayoría socio-política y electoral se transformara en mayoría institucional y pudiera efectivamente gobernar. De ahí la prioridad y urgencia de las reformas políticas orientadas a este fin. Para todo esto se contaba en el

período inicial con lo que se ha llamado el estado de gracia y, además, con una derecha dividida entre los nostálgicos del autoritarismo y los que buscaban un espacio en el régimen democrático, a los que podía incorporarse —a través de la negociación— a las reformas más indispensables, prolongando los acuerdos que llevaron a las reformas constitucionales plebiscitadas en julio de 1989.

Dos observaciones adicionales para completar el cuadro de los desafíos del gobierno democrático en el momento de su inauguración.

La primera se refiere a la intrínseca interrelación entre los diversos enclaves autoritarios, que obliga a una estrategia global, de tratamiento de conjunto de ellos, en la que sin dejar de reconocer la especificidad de cada uno, deben combinarse los avances en uno con las concesiones en otro, de modo de ir a la superación o neutralización global sabiendo que no pueden eliminarse todos inmediatamente. De nuevo aparece aquí como la viga maestra en esta estrategia las reformas institucionales que aseguren la capacidad de gobierno y la expresión efectiva de la voluntad de la mayoría elegida democráticamente.

La segunda se refiere a la también íntima relación que existe entre estos dos desafíos, el de completar la transición y el de iniciar la consolidación democrática a través de procesos de democratización social y modernización. El primero de ellos privilegia necesariamente la política profesional, cupular, la negociación, el papel de las elites y de la representación. Su prolongación o retardo implica la proyección de este tipo de política en el tiempo como la única forma de acción colectiva. Ello tiende a producir la frustración o el descontento de los sectores menos politizados, de la gente común, que no ven cambios en su vida cotidiana, lo que lleva a la apatía o al refugio en los corporatismos sin metas globales o en diversos tipos de mesianismos. En cuanto a los núcleos más activos y militantes, esta frustración o descontento tiende a llevar a la desilusión respecto del gobierno, a radicalizaciones ideológicas, a las tentaciones de paso a la oposición o a la nostalgia de los "camino propios" de cada sector que compone la

coalición de gobierno, con lo que se alimentan tendencias centrífugas y erosionadoras.



MÁS QUE CEGUERA

Vale la pena indicar que hay aquí un fenómeno mucho más profundo que la simple ceguera de vastos sectores que le impiden a un cambio de régimen algo que ningún régimen puede dar. Se trata, en efecto, del hecho que estas transiciones o redemocratizaciones políticas, al menos en el caso chileno, van acompañadas subterráneamente de un cambio cultural de gran envergadura que se refiere a la transformación, ya no sólo de un régimen, sino de la matriz de acción política y colectiva de la sociedad, de la política misma. La tradicional relación de imbricación o fusión entre Estado, partidos o actores políticos y actores sociales o sociedad civil, cede paso a una relación de mutua tensión que busca el fortalecimiento de cada uno

de esos tres elementos. Tanto la política heroica de proyectos globales de los sesenta como la de lucha contra la dictadura, así como la política tradicional más profesional tienden, ya sea a desaparecer la primera, ya sea a reducirse a un ámbito muy específico la segunda y, por lo tanto, a no dar cuenta de esta mutación en la matriz política y del surgimiento embrionario de una nueva matriz de acción política y colectiva.

Entre los rasgos que tienden a definir esta nueva cultura política están: la ausencia de paradigmas ideológicos globalizantes que abarcan todos los fenómenos de la vida social y la historia de una sociedad; la combinación de la búsqueda de pertenencia y acción colectiva con un alto nivel de individualismo; el anhelo de cambio social pero también de orden y el rechazo a las formas más antagonísticas o conflictivas y clásicas de obtenerlos; la desconfianza en modelos utópicos cerrados y la armonización de ideales éticos con utopías parciales para la sociedad y con la búsqueda de la plena expresión individual y de comunidades; la redefinición del papel del Estado; el cuestionamiento de las formas tradicionales de representación y del militantismo partidario; la tendencia a participar en la resolución de los propios problemas y del entorno con una visión más universal, sin agotar la expresión personal o colectiva en la acción política y manteniendo espacios o instituciones autónomas que protejan lo privado y que humanicen lo público; etcétera. Se acaba la política heroica y la política profesional no da cuenta de estas grandes tendencias. Surgen así formas espúreas de reemplazo de la matriz clásica de la política, ya sea de la vertiente heroica o la profesional, como totalizaciones de algunas de las tendencias particulares de la nueva cultura política: el tecnocratismo, el corporatismo sin metas globales, los mesianismos fundamentalistas, el reforzamiento aunque minoritario de la matriz clásica, ya sea a través de radicalismos ideologizados o populismos extremos o militatismo sectario.

Mientras más tiempo y energía toman los problemas de la transición, remanentes de la política tradicional y que por su propia naturaleza no logran

C O N G R E S O D E L P S :
BALANCE Y PERSPECTIVAS

RICARDO NÚÑEZ

El Congreso de Unidad Socialista Salvador Allende tuvo su centro en los problemas de reconstrucción de la fuerza partidaria del socialismo.

Más allá de las apariencias o enfoques interesantes, lo medular es que los dos puntos candentes de los debates del Congreso, o sea la relación del Partido Socialista (PS) con el Partido por la Democracia (PPD) y la integración de la Izquierda Cristiana (IC) al PS, estaban referidos claramente (o aún si así no se advirtiera), en rigor, al fortalecimiento y desarrollo de la fuerza política socialista.

El hecho que no se debatieran en profundidad temas como el papel del PS en el gobierno y en la Concertación o como el de la política internacional del socialismo chileno, no sólo debe leerse como un déficit del Congreso. También se debe entender como el resultado de un amplio consenso del partido en cuanto a su política de pertenencia y compromiso con el gobierno de la transición a la democracia encabezado por el presidente Aylwin, y en cuanto a su línea de lealtad y mantenimiento de la Concertación.

Ciertamente, alrededor de estas dos últimas materias existen en el PS énfasis y matices, pero no alternativas. Esto constituye en sí una prueba contundente del predominio de la política *concertacionista* en el seno del socialismo.

Aunque la polémica sobre las relaciones PS-PPD se planteó con connotación eminentemente negativa al abogarse por el término de la "doble militancia" entre ambos, el resultado está marcado por una connotación de signo positivo. Ello es lo que se establece en el voto respectivo cuando se llama a superar el problema de la "doble militancia" constructivamente, en el plazo

de dos años, por la vía de la convergencia entre el PS y el PPD.

Para un PS que reivindica la democracia como componente esencial del socialismo que busca impulsar y como camino sólido para alcanzar sus fines, no podía ser de otro modo.

En efecto, al asumir la democracia como el objetivo y el camino del socialismo, el PS ha desahuciado de las vías armadas, violentas e insurreccionales para abrir paso a sus ideales, y las ha reemplazado por la conquista de la adhesión de las mayorías nacionales a su programa de democracia y cambio.

Para que esto sea posible, el PS requiere un proceso de integración y suma de fuerzas políticas y sociales, en particular con los actores más cercanos desde el punto de vista de sus objetivos progresistas, populares, democráticos y de cambio hacia la justicia social. Es, precisamente, el caso del PPD, cuya cercanía al PS es mayor que la de cualquier otra fuerza política en el país. Tal es además lo planteado por el voto del Congreso de Unidad Socialista Salvador Allende en relación a los vínculos PS-PPD y, en consecuencia, el mandato de este evento máximo del socialismo al nuevo comité central del partido.

Por todo ello es que, aún cuando puedan existir otras interpretaciones de dicha resolución, afirmo con certidumbre que el Congreso del PS —como es natural después de diecisiete años de represión y diez años de división— se planteó como asunto urgente el de la reconstrucción de su fuerza partidaria, y por la vía de la convergencia con el PPD, para así ser cauce efectivo de las aspiraciones y objetivos de la mayoría nacional. ◀

expresar las grandes tendencias indicadas, más difícilmente se constituyen los nuevos actores y manifestaciones de la acción colectiva y más se dificultan los procesos de democratización social y modernización propios de la consolidación democrática y en los que mejor se expresan las nuevas dimensiones de la política.

PARADOJA DE LOGROS PARCIALES

No cabe analizar el primer año de régimen y gobierno democráticos desde la perspectiva tradicional de una administración de gobierno, por cuan-

to quiérase o no, cuando se inaugura un nuevo régimen, se está ante una dimensión fundacional. En este sentido, cabe analizar este período en términos de las tareas o desafíos a los que hemos hecho mención. En todo caso, no se puede negar que en materia de políticas públicas, de creación de un clima efectivo de reconciliación y de actitud de respeto efectivo hacia los derechos humanos por parte del Estado, de inserción internacional, de manejo económico-financiero, de preocupación por los sectores más desposeídos, de creación de un nuevo ambiente de convivencia, de capacidad de los equipos de gobierno en los



COMPROMISO DE DIRECCION

“En la noche del 10 de septiembre, sentado junto a Hernán Vodánovic, Manuel Almeyda y Ricardo Núñez y en presencia de numerosos otros dirigentes socialistas, el secretario general del PS, Jorge Arrate, dio lectura ante la prensa al siguiente documento, en el que se explican los acuerdos convenidos entre ellos para la conformación de la próxima dirección partidaria.

El Partido Socialista de Chile vive momentos históricos. La unidad lograda en diciembre pasado, simultáneamente con la democratización del país, ha generado una dinámica de crecimiento y desarrollo partidario de grandes posibilidades.

Con el espíritu plenamente compartido de trabajar en conjunto para hacer del PS una gran fuerza política orgullosa de su historia y con perspectiva moderna, un grupo de dirigentes de diversas sensibilidades y corrientes de opinión interna, representativos de prácticamente la totalidad de los miembros de la actual comisión política, queriendo interpretar el profundo sentimiento unitario de la gran mayoría de la base socialista, hemos llegado a un consenso sobre la máxima dirección partidaria para los próximos dos años.

Este consenso se expresa en los acuerdos siguientes.

1. Construir un vértice superior de dirección fundado sobre la base de la cooperación y el entendimiento entre el actual presidente del partido, compañero Clodomiro Almeyda, el actual secretario general del partido, compañero Jorge Arrate, y el actual jefe de la bancada parlamentaria, compañero Ricardo Núñez.

2. Proponer al Congreso Salvador Allende la constitución de un nuevo órgano denominado consejo superior, constituido por personas de reconocida trayectoria partidaria, que el Congreso habrá de nominar. Esta propuesta se basa en la necesidad de adecuar la estructura orgánica a la nueva realidad configurada por la existencia de un gran partido organizado en torno a corrientes de opinión que se identifican como tales y cooperan y compiten entre sí. Esta nueva realidad hace indispensable crear en el partido un órgano eficaz, de funcionamiento permanente, que ejerza su función por sobre dichas corrientes, encarnando una fuerza político moral representativa del espíritu colectivo.

Se propone que el consejo superior sugerido sea dotado de las siguientes funciones:

a) facultades disciplinarias de última instancia con obligación de fallar en conciencia.

b) facultades superiores de control financiero y revisión de cuentas.

c) facultades de conciliación de conflictos, a petición de parte o de propia iniciativa.

3. Proponer al Congreso Salvador Allende la nominación del compañero Clodomiro Almeyda como presidente honorario del Partido Socialista de Chile.

4. Proponemos al partido organizar el trabajo colectivo del vértice direccional de la manera siguiente: Clodomiro Almeyda, en su calidad de presidente honorario, como presidente del consejo superior.

Jorge Arrate, presidente del Partido Socialista durante un año a partir del próximo Congreso, y vicepresidente al año siguiente.

Ricardo Núñez, vicepresidente del Partido Socialista durante un año a partir del próximo Congreso, y presidente al año siguiente.

5. Proponer al Congreso Salvador Allende la creación de cinco vicepresidencias adjuntas que recaerán en quienes nomine el Congreso. Se propone que dichas vicepresidencias se asignen en proporción a los votos obtenidos por las diversas listas de candidatos al comité central. La creación de estas vicepresidencias permitirá constituir órganos superiores de dirección auténticamente integradores, que no excluyan a ningún sector significativo de las tareas de conducción política.

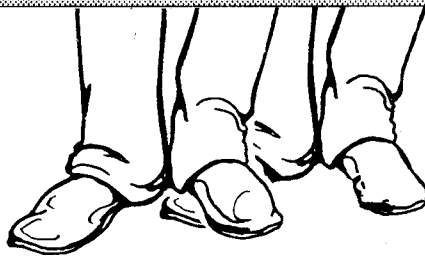
6. Proponemos que la secretaría se designe por el comité central que se elegirá próximamente y que esté constituida por un secretario y dos subsecretarios que correspondan cada uno a las tres listas al comité central de más alta votación. En el caso que esta fórmula no sea acogida postularemos de común acuerdo un candidato a la secretaría.

7. Postulamos, por lo tanto, una mesa directiva compuesta por diez miembros: un presidente, un vicepresidente, cinco vicepresidentes adjuntos, un secretario y dos subsecretarios.

8. Los compañeros Clodomiro Almeyda, Jorge Arrate y Ricardo Núñez no postularán en las listas al comité central y, si este consenso fuera acogido sin oposición, se abstendrán de participar en la campaña electoral en favor de listas o personas determinadas.”

U y L, septiembre de 1990, Santiago de Chile.

diversos niveles, de homogeneidad y de solidez, difícilmente previsible, en las relaciones entre los componentes de la coalición de gobierno, etcétera, el primer año es muy exitoso. El resultado de las encuestas sobre la popularidad y nivel de apoyo con que



cuentan régimen y gobierno atestiguan esto, por lo que pudiera pensarse que no ha terminado aún el llamado estado de gracia.

Si se examinan las cosas desde la perspectiva que hemos indicado, es decir, desde la perspectiva de comple-

tar la transición superando los enclaves autoritarios y de iniciar la consolidación democrática profundizando la democratización social y la modernización, lo que llama la atención es la paradoja de los logros parciales sin una estrategia global que pusiera como prioridad la reforma institucional para aumentar la capacidad de gobierno de la mayoría política y para permitir canalizar la participación social (reforma constitucional para resolver problemas de mayorías artificiales por senadores designados, descentralización del poder o reforma municipal, reforma del poder judicial, etcétera), negociando tales reformas con los sectores más democráticos de la derecha.

Así, se optó por una táctica de negociaciones puntuales, en que cada problema se atacaba aisladamente buscando formar mayoría con el sector disponible de oposición, sin intentar consolidar un sector democrático de ella y sin una estrategia general de enfrentamiento del conjunto de enclaves autoritarios. De algún modo se trasladó a la acción política el tipo de cálculo económico de incentivos, costo/beneficio, negociación a partir de una consideración estática de recursos y no de metas globales. Con ello, se obtuvo sin duda logros parciales; pero se deja al gobierno de algún modo encerrado en los cálculos de la táctica coyuntural de cada sector de oposición, con lo que de alguna manera se hace dependiente de ella, sin que ahí se fortalezca el polo democrático; así como se fortalecen los actores e intereses corporativos, ya sea a través de alguna negociación puntual (reformas laborales), ya sea en términos generales, debilitándose la dimensión más global de los actores sociales y debilitando a los actores políticos. Todo ello erosiona los apoyos más activos en la base social y militante que sienten que "nada ha cambiado" y que no tienen espacios de expresión y participación, y debilita al actor político partidario de gobierno, la Concertación de Partidos por la Democracia, que tanta capacidad conductora había demostrado en el período de transición propiamente tal. Esta ausencia de la Concertación en la conducción política, si bien puede tener la ventaja de arrojar una imagen de gobierno por

C O N F I R M A C I O N

—*"En esta renovación de la directiva se dio una situación bien especial. Se logró un consenso para la presidencia y la vicepresidencia. El único elegido hasta ahora es usted. ¿Quién va a mandar en el PS?"*

El Partido Socialista es mandado por la dirección del partido y la primera autoridad es el presidente.

—*¿Se va a llamar Partido Socialista Arrate o Partido Socialista Almeyda?*

¡No! ¡Se va a llamar Partido Socialista de Chile!, como siempre se ha llamado este partido.

—*¿Cuántos representantes de su lista van a integrarse a la directiva?*

Aparte de la secretaría general, que corresponde a la lista más votada, se establecerán dos subsecretarías que serán ocupadas por las dos listas que sigan en fuerza política electoral. Además, se nominarán cinco vicepresidencias adjuntas que también serán distribuidas proporcionalmente entre las listas que tuvieron mayor votación, por el sistema de cifra repartidora."

La Epoca, Santiago de Chile, 11 de noviembre de 1990.

encima de partidos, tiene como efecto alimentar tendencias centrífugas en la Concertación, en la medida que cada partido "enfriá" su apoyo al gobierno, se encierra en sus problemas internos y se transforma en receptáculo del descontento militante, primando los sectores más críticos y que tienden a enfatizar la identidad y el "camino propio" partidarios.

POLÍTICA SIMBÓLICA Y RESOLUCIÓN

Quizás la mejor ilustración de esta paradoja de los logros parciales sin estrategia global, con sus ventajas y con sus costos, sea el tratamiento de uno de los enclaves autoritarios de mayor sensibilidad en la población y en los núcleos más activos, así como en la relación con los otros enclaves: el de los derechos humanos.

El programa de la Concertación en esta materia era bastante radical en relación a lo que han sido las experiencias históricas al respecto, en la medida que se acercaba más a una postura ética frente a la sociedad que a un programa de acción concreta gubernamental. Pero tanto el Programa como la solidez de los principios éticos y fuerza de voluntad del gobierno, especialmente de sus máximas autoridades, no encontraron respaldo en una estrategia que vinculara la muy efectiva política simbólica frente al



tema (baste recordar el acto inaugural del gobierno en el Estadio Nacional, la creación de un monumento a los desaparecidos en el Cementerio General, el funeral del presidente Allende, la creación de la Comisión Rettig que tiene alcances más allá de lo simbólico, etcétera) con la resolución efectiva del problema y con una adecuada vinculación al tratamiento del enclave institucional y de neutralización de los núcleos autoritarios.

Así, la primera iniciativa (leyes Cumplido) para resolver el problema puntual de los presos políticos dejó planteado el tema general por parte de la derecha sin una coherencia estratégica por parte del gobierno. Ello llevó a acuerdos parciales con sectores de derecha, que el clima creado por el descubrimiento de cadáveres echó por tierra, cambiando la correlación de fuerzas simbólicas a favor de soluciones más integrales y radicales. Entretanto, la creación de la Comisión Verdad y Reconciliación resolvía simbólicamente parte del problema, ya planteado en su globalidad más allá de las iniciativas del gobierno, el poder judicial liquidaba la parte "verdad" del programa de gobierno al establecer que no podía investigarse sobre violaciones a los derechos humanos cubiertas por la ley de amnistía del régimen militar. Después de varios meses, en los que no se resolvió el problema inicial de los presos políticos, la solución propuesta por la oposición fue precisamente la que el gobierno debía haber planteado desde un inicio para la superación de todos los problemas heredados desde el régimen militar: la reforma constitucional acordada con la oposición.

NÚCLEO AISLADO

Si en el tratamiento de los enclaves institucionales quedó al desnudo la ausencia de prioridades y estrategia (piénsese, además de lo indicado hasta ahora, en las contradictorias afirmaciones sobre los senadores designados; en que el tema de la reforma municipal fue pensado más en términos de la cuestión electoral indispensable que en el terreno de la descentralización del poder, o en relación a otras leyes sobre el sistema electoral o de partidos), en el tratamiento de los

problemas de derechos humanos quedó al desnudo la falta de una coherencia estratégica que planteara el problema en su globalidad y en relación con el tema institucional y de los actores no democráticos, pese a los avances obtenidos y a los previsibles en el año 1991.

Pero, en el tratamiento puntual de este último enclave, el de los actores no democráticos, específicamente, el del núcleo pinochetista, el gobierno mostró una excelente conducción. De lo que se trataba en el primer período era de evitar el protagonismo político de Pinochet y sus apoyos cívico-militares y de aislar las tendencias antidemocráticas en las FFAA y, sobre todo en el Ejército. Ayudado por el clima creado en torno a los escándalos financieros al interior del Ejército bajo el régimen anterior y desconocidos por la opinión pública en aquel tiempo, y por las torpezas en que incurrió la impaciencia del general Pinochet en sus intervenciones políticas, el gobierno, aún manteniéndose en una estricta legalidad que lo perjudicaba, logró una muy madura relación con el conjunto de las FFAA y el núcleo no democrático pinochetista quedó aislado. La única excepción a este atinado tratamiento fue la relativa debilidad en los acontecimientos de diciembre, que fueron conocidos como "ejercicios de enlace" y que tenían un alcance político que no podía negarse.

En todo caso, el éxito parcial en la cuestión de los núcleos antidemocráticos no puede desconocer el que no habrá solución definitiva en esta materia sin una relación entre este problema y el de los derechos humanos, y especialmente, si no hay reformas institucionales al respecto que coloquen a las FFAA en el lugar que les corresponde de subordinación al poder político.

PASOS IMPORTANTES

En síntesis, en la tarea de completar la transición se lograron avances desiguales, sin un planteamiento global que movilizara el conjunto de recursos del gobierno para una superación rápida de los enclaves autoritarios, con lo que se retarda la solución de problemas que tienen relación con los procesos de modernización y demo-

cratización sociales. Sin embargo, el hecho ya anotado que el gobierno mantiene casi intacto su nivel de apoyo social y la unidad de la coalición de gobierno, es decir, la probable perduración del "estado de gracia" al completar casi un año de ejercicio, hace pensar más que en un tiempo perdido en un tiempo o período de aprendizaje, al término del cual se replantean como prioridades las reformas político-institucionales, la revitalización de la conducción política de la Concertación y la creación de canales de expresión y participación, como instrumentos para completar las tareas de la transición pendientes.

En relación a las tareas de consolidación, más allá que ellas se compliquen, retardan o dificultan en su definición e implementación en la medida que se prolongan las de transición, cabe hacer algunas observaciones.

La creación de un clima democrático de ejercicio de las libertades públicas, que por sí mismo lleva a los diversos sectores y grupos a plantear iniciativas de modernización y democratización social, así como el apoyo institucional para este tipo de participación (reformas laborales) y el apoyo estatal a los grupos más desfavorecidos para lograr su integración (reforma tributaria y fondos para combatir la extrema pobreza), son parte significativa de un proceso de consolidación democrática. También lo es la mantención de una coalición social y política amplia para enfrentar modernización y democratización. En ese sentido, se han dado pasos importantes en este proceso de consolidación.

Sin embargo, ello es aún parcial, en la medida en que no parece haberse planteado una clara definición para la(s) próxima(s) década(s) sobre el modelo de desarrollo e inserción en el sistema latinoamericano y mundial y sobre el nuevo tipo de relación a establecerse en nuestra sociedad entre Estado, sistema político partidario y sistema de actores sociales o sociedad civil. En estas materias no basta con proclamar un consenso en instrumentos como son el de economía abierta o de mercado, ni tampoco imponer un modelo cerrado al respecto o decir que ya se acabó el tiempo de los modelos globales y que todo se irá definiendo pragmáticamente. El inme-

INTEGRACIÓN DE LA IC Y NUEVA DIRECTIVA

“El primer pleno del nuevo comité central del Partido Socialista (PS) eligió ayer a los integrantes de la mesa y comisión política de la colectividad, y aprobó la nómina presentada por los ex dirigentes de la Izquierda Cristiana (IC) para integrar a siete de sus representantes al comité central del PS.

(...) según informó el presidente del PS, Jorge Arrate, se aprobó por unanimidad la propuesta de la IC, con lo cual se integraron inmediatamente al pleno los siguientes dirigentes: Juan Enrique Miquel, Carlos Cano, Hernán Cárdenas, Nidia Palma, Juan Cavada, Mahmut Alegui y Luis Maira.

La mesa del PS quedó constituida oficialmente de la siguiente manera: Jorge Arrate, presidente; Ricardo Núñez, primer vicepresidente; Manuel Almeyda, secretario general; Hernán Vodanovic, vicepresidente; Isabel Allende, vicepresidenta; Jaime Pérez de Arce, vicepresidente; Camilo Escalona, vicepresidente; Luis

Maira, vicepresidente; Lincoyán Zepeda, subsecretario y Alfonso Guerra, subsecretario.

Arrate, tras el primer pleno del nuevo comité central del PS, calificó como muy importante la integración de la IC a su colectividad porque “legítima, válida y confirma la convocatoria que ha justificado todo este proceso de unidad socialista y que estuvo fundada en las bases doctrinarias aprobadas el 29 de diciembre pasado (ver núm. 17) y en las cuales se estableció un gran principio renovador: la posibilidad de que personas que se identifican con la corriente cultural marxista crítica, que se identifican con la corriente ideológica original de cristianismo de opción popular y quienes están por el humanismo laico y racionalista, participen con iguales derechos al PS.”

La Nación, Santiago de Chile, 4 de diciembre de 1990.

diatismo coyuntural no puede ahogar la capacidad de debate de una sociedad entera para definir democráticamente su futuro más allá de su adscripción a este régimen político. Dicho de otra manera y con una ilustración, una vez instalado el régimen democrático en España, esa sociedad tuvo que tomar ciertas opciones cruciales respecto de su sistema de convivencia como nación tanto sobre cuestiones internas que la afectaban (autonomía de sus nacionalidades), como sobre su inserción en el mundo (la cuestión europea).

MODELO QUE REPLANTEE

A toda sociedad se le plantea esté tipo de definición de modo específico, cuando se deja atrás no sólo un régimen, sino un tipo de matriz social que trató de implantarse y que ella rechaza. En nuestro caso estas cuestiones se refieren al modelo de desarrollo que replantee el problema de la justicia social y la integración de todo un sector marginado de la vida moderna y que replantee las relaciones del país con los procesos que atraviesan el mundo contemporáneo. No se puede volver al viejo modelo de industrialización ni tampoco al que se quiso imponer bajo la dictadura: cabe una

definición colectiva frente a propuestas como las que hoy hace CEPAL y otras que están discutiéndose en diferentes contextos. Pero ello debe ser acompañado de un debate nacional también sobre aquello que definíamos como el cambio de la matriz socio-política de la sociedad chilena, es decir, de la relación entre Estado, sistema político y sociedad.

No parece haber claridad en las fuerzas políticas dirigentes de nuestro país al respecto, lo que lleva a que el impacto neo-liberal haya producido una absorción inmadura sobre temas como el Estado y la descentralización del poder. Así, en vez de afirmar el rol dirigente del Estado, como ha ocurrido en todos los países de desarrollo exitoso, y acompañar esta afirmación de una reforma profunda del Estado en orden a hacerlo más participativo y moderno, se tiende a asimilar fácilmente el modelo simple de desestatización, se banaliza la imagen estatal en beneficio de los intereses corporativos y proliferan las tendencias a las autorregulaciones corporativas en cada campo de la sociedad, sin que ello signifique el aumento de la participación societal o la real descentralización. Tampoco hay una definición sobre la cuestión de la representación y el sistema de partidos y sus

nuevas formas de interrelación con la sociedad civil y sus canales y estructuras de participación.

Todos estos temas no pueden resolverse de la noche a la mañana, pero una sociedad que inicia una nueva etapa de su historia, quiera o no dársele a ello una dimensión fundacional, no puede dejar de plantearse desde su inicio.

VISIÓN TRADICIONAL MANTENIDA

Ya nos hemos referido al relativo aislamiento de los sectores antidemocráticos y a las dificultades de consolidación de un fuerte actor democrático de derecha, en la medida que en ésta persiste una tensión, expresada en su división interna, entre la nostalgia autoritaria y su definitiva inserción como actor democrático minoritario.

Vale la pena terminar estas reflexiones con algunas observaciones sobre el actor Concertación, en la medida que hemos dicho que éste parece ser el elemento principal en el éxito de la transición chilena y en el éxito probable de la consolidación democrática. Su relativa ausencia de la conducción política en el primer año de gobierno ha tenido como efecto el que los eventos partidarios más

importantes de sus dos ejes principales (actos electorales de la DC y elecciones y congreso del Partido Socialista) fueran destinados a ciertas *catarsis* de descontentos y a problemas orgánicos internos y no a la consolidación de las tendencias renovadas de ambos partidos y al debate de los problemas que hemos mencionado y que afectan el futuro de la sociedad chilena. Ahí también está la raíz en ambos partidos del resurgimiento de las tendencias que enfatizan la identidad y el camino propios y de la incomprensión de fenómenos tan nuevos e interesantes en la política chilena como el PPD, intentando resolverse los problemas que esto plantea por la vía burocrática y tradicional.

Lo que pareciera estar detrás de todo esto en ambos partidos es la mantención de una visión tradicional de la política que no es capaz de asimilar lo que ha sido la profunda riqueza de la propia experiencia que estos actores políticos han impulsado y vivido. En efecto, la creación de la Concertación que resolvía un problema casi secular de la política chilena y el problema crucial de todos los procesos de democratización, obligaba a pensar que, de ahora en adelante, nunca más un proyecto político debía pensarse desde la propia identidad para luego "pactar" con otras identidades, sino que tal identidad y proyecto se debía definir "al interior", "desde dentro" de la coalición, como un énfasis en ciertos aspectos de un proyecto común que llevara a una competencia por el liderazgo sin poner en cuestión la existencia y proyección de tal alianza. Las tendencias de la DC a identificar una alianza política con su propio liderazgo en ella y del socialismo a reconstituir un mítico y nostálgico actor de izquierda "desde fuera" de la Concertación para disputar el liderazgo de la DC, impiden valorizar la radical y positiva mutación de la política chilena que significó la propia Concertación y, por lo tanto, desarrollar su diversidad al mismo tiempo que fortalecer su unidad.

NUEVA RELACIÓN

Si se acepta el hecho básico que la consolidación de la democracia chilena,

en el plano político-partidario, está ligada a la mantención por largo tiempo de la Concertación y a la capacidad de ésta de mantener su unidad aceptando sin quebrarse la lucha democrática por su liderazgo, aparecen como fundamentales dos reformas políticas complementarias.

La primera se refiere a la creación de nuevas instituciones, que tengan por finalidad específica (como la reforma del sistema presidencialista extremo, por ejemplo) la posibilidad de gobiernos democráticos mayoritarios, en cuyo seno se disputa legítimamente la conducción periódica evitando transformar las reformas institucionales que tienen otro sentido nacional

(reforma municipal, por ejemplo) en mecanismos de resolución del liderazgo de la coalición para los próximos períodos. La segunda, ampliar la capacidad de participación societal en los procesos de modernización y de democratización de la sociedad (descentralización del poder, por ejemplo), devolviendo a los actores sociales las posibilidades de decisión acaparadas hasta ahora por los actores políticos y estableciendo entre ambos y con un Estado refortalecido, modernizado y democratizado, un nuevo tipo de relación que reconozca la indispensabilidad de cada una de estas tres dimensiones de la vida social. 